

ROSTROS de la EPIDEMIA

El COVID 19, el virus que sigue afectando la vida a nivel mundial y del que la ciencia aún no acaba de decir la última palabra, ha tenido la particularidad de poner en escena rostros diversos, que también se manifiestan como pandemias que agobian a las sociedades; y dentro de ellas especialmente a los empobrecidos, víctimas de los poderosos. Epidemias que se arrastran desde largo tiempo, sin lograr su extirpación; pero que denuncian enfermedades sociales causadas en los modos concretos de organizar la sociedad, por quienes han manejado los hilos de los poderes establecidos. Aunque parezca reiterativo, estos males no son frutos caídos del cielo, ni obedecen a la predestinación divina. Tampoco ningún castigo de Dios a culpas inexistentes, aunque nunca falta alguien que apela a la magia de la divinidad para justificar la explotación y la esclavitud. Si humanos fueron los generadores, humanos también serán los hacedores de los cambios. Insistimos en esto, que parece tan evidente, porque sería bueno erradicar el discurso de la convivencia armónica con todos y todas, cuando existen los que no quieren ni convivencia ni armonía. Y utilizan ese argumento para esconder su responsabilidad y oponerse a las transformaciones sociales. A estos grupos de poder sólo les gusta una pacificación que mantenga sometidos a los sin Trabajo, sin Techo y sin Tierra. Tres T, cuya ausencia agudiza las epidemias sociales en medio de la pandemia que padecemos. Siempre existen los pregoneiros de una espiritualidad desencarnada, que mirando al cielo, pretende el consuelo del más allá y la resignación en el más acá. Mensaje destinado a los pobres por muchos años; pero que encierra su contradicción en la misma vida de los empobrecidos, que siempre encuentran formas de resistencias y luchas para cambiar las situaciones de injusticias. Porque en definitiva la tarea de vivir, cada día, requiere luchar contra la muerte. Y los rostros de la epidemia neoliberal –como nuevo nombre del capitalismo – viene ocasionando millones de muertes, que obligan los esfuerzos de la humanidad para erradicarlo. El contagio de la enfer-

medad neoliberal aún no ha encontrado las vacunas o antiparasitarios para obstruir la penetración del virus mortal. Pero en la historia padecida hay miles de ejemplos para indicarnos que es posible contrarrestar sus efectos y obtener progresos en la lucha con esta enquistada epidemia de que pocos acaparen mucho.

Ningún virus es invencible, ni ninguna epidemia es eterna. El coronavirus, que desde su invisibilidad ha mostrado el poder de hacernos sentir las limitaciones humanas, ha tirado por la borda soberbias y omnipotencias, tantas veces esgrimidas por quienes se sienten dueños de la vida y las posesiones de otros y otras. Ojalá este “bichito” imperceptible a simple vista, ayude a tomar conciencia de la necesidad de contar con las y los demás para hacer un mundo vivible, para hoy y para quienes vengan después, como lo hicieron los que nos precedieron, con sus propias limitaciones y virtudes. El COVID 19 nos reubica en nuestra propia condición humana. Desde allí hay que proyectar la sociedad inclusiva, sostenible y perdurable.

Si se escarba en las realidades que alcanzamos a percibir – porque seguramente habrá otras que no nos llegan – encontraremos tantos rostros como carencias afloran en nuestros contextos históricos. Quizás uno de los más cercanos al virus sea la multiplicidad de visibilizaciones sobre los sistemas de salud, que además de precarios e insuficientes para la inmensa mayoría excluida de los sistemas sanitarios organizados, obran como denuncia social de la desigualdad en el cuidado de la salud. Y aunque el virus no diferencia clase social, sí se evidencia a la hora de las posibilidades de las medidas preventivas y la internación. No es la misma la situación de quienes tienen una obra social prepaga que la de la mayoría de los pobres atendidos por el sistema de salud pública, no siempre bien provisto por quienes gobiernan. Debemos reconocer el esfuerzo sobrehumano de los agentes sanitarios, que escasos y mal pagos, ejercen su vocación de servicio a pesar de la precariedad de medios. Pero también hay que valorar los esfuerzos de aquellos gobernantes que durante todo este año volcaron recursos y multiplicaron opciones hospitalarias, de las que se carecía. No es lo mismo un gobierno que anuló el Ministerio de Salud, que otro que lo restableció y se puso la pandemia al hombro, siendo acompañado por la inmensa mayoría de la población. Algunos gobiernos locales han sido más mezquinos con la salud y han cedido a las presiones de los intereses económicos. Muy pocos, con más ruido que gente, fueron los se creyeron superdioses y desafiaron las me-

didadas de cuidados que los gobiernos nacional y de las provincias debieron imponer. Pero la muerte incluyó a los anticuarentena.

Otro rostro de la epidemia, difícil de resumir aunque no de visualizar, es el demostrado por los que se han aprovechado de la situación para revelarse como miserables. En la situación de defensiva y encierro de quienes más se cuidan porque tienen menos herramientas para curarse, los pobres, los trabajadores y en general las clases menos pudientes, han debido soportar la prepotencia de los poderosos, especialmente de quienes se autotitulan “dueños” de tierras y bienes, que se niegan a compartir. La pandemia ha demostrado aquí el rostro injusto que abarca muchos aspectos de la realidad. Uno de ellos son las leyes, que en nombre de la república y la democracia, levantan los que las usan para consolidar situaciones injustas, como la tenencia de la tierra en nuestro país. Pocas veces, en una sociedad con marcadas diferencias sociales, las leyes de la democracia favorecen a los que menos tienen. Las apropiaciones de tierras por parte de enriquecidos empresarios, en el sur patagónico, en el litoral o en el centro, en el norte y en otras zonas del país, han sido puestas a la luz pública al evidenciarse el escándalo de los que carecen de viviendas o algunas hectáreas para cultivar; y más aún los pueblos originarios que siguen exigiendo la devolución del hábitat, que siempre les perteneció. No son ajenos a esta realidad los incendios en Córdoba, en los humedales del Paraná o en otros lugares del país, que con intencionalidad comercial destruyen los bosques, para proyectos inmobiliarios elitistas o grandes negocios agrotóxicos. Aquí la acción de los gobiernos provinciales es tardía e ineficaz, aunque también con graves sospechas de complicidad y corrupción.

Otro rostro de la pandemia es la desigualdad agudizada que ha elevado la cantidad de los empobrecidos. Por desocupación, por reducciones salariales, por explotación laboral y otras facetas de las mezquindades que afloran cuando las condiciones empeoran. El mayor peso lo pagan los de abajo. Los bolsillos de los ricos se cierran y el corazón egoísta se endurece. Y se organizan en caravanas de 4x4 para hacer sentir su peso. Así los potentados, y los que sin un peso les envidian el lugar, se atrincheran en una defensa mezquina, que acentúa el odio discriminador hacia los pobres, “negros” y “vagos”, como estigmas que los harían merecedores del descarte social. El desalojo de Guernica (provincia de Buenos Aires) puso al descubierto que tres millones y medio de familias argentinas no poseen vivienda digna. Y el plan de integración

de barrios populares reflejado en el Presupuesto 2021, recientemente aprobado, implicaría que las villas se terminarían de urbanizar en 40 años. Si la matriz de distribución de la riqueza que se genera con el trabajo de todos y todas las y los argentinos, no cambia, la epidemia de la falta de vivienda deberá soportarse por mucho tiempo. No sólo eso. Tampoco girará la rueda de producción-trabajo-mercado interno, capaz de generar bienestar a la mayoría hoy necesitada. ¿Acaso la excesiva concentración de riquezas en pocas manos no constituye para los cristianos un pecado social? ¿Acaso los empobrecidos del país estarán condenados a esta violencia del arrebato de los poderosos, sin poder reaccionar? Parecen oportunas las palabras del Papa Francisco: “Si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social”. (Fratelli Tutti, 234).

Tierras apropiadas

El rostro de la epidemia de la intocable propiedad privada, de la que están privados los más pobres, se ha mostrado en su peor crudeza. Por la ostentación de poder capaz de manipular decisiones judiciales, como lo ocurrido en Entre Ríos o en los predios flojos de papeles de Guernica, que implicó el desalojo de ocupantes sin vivienda que pretendían instalarse allí. Pero también en el sur argentino, donde desde las tierras de los mapuches hasta un lago de todos, fue apropiado por el extranjero Joe Lewis, violando leyes nacionales, con la complacencia de su amigo y visitante Mauricio Macri.

Ni el estado nacional ni los gobiernos provinciales han tenido la fuerza de generar soberanía popular sobre sus propios territorios. Más bien han cedido a la prepotencia de los apropiadores. A veces temerariamente, con un discurso favorable a la seguridad que debe cuidar la vida, se llega a la violencia institucional, cuando las fuerzas policiales son utilizadas para proteger especialmente los bienes de los poderosos o por una equivocada política pública que considera a los pobres y a los jóvenes como peligro social. Y crece tanto la represión a protestas obreras como las víctimas del “gatillo fácil”. Lo vivimos en Córdoba; pero también se ha visto en otras provincias argentinas, siguiendo el mal ejemplo de la policía blanca que asesina negros en los EEUU.

La debilidad de esta democracia, con poderes institucionales, - sea en el judicial sea en el legislativo - que ceden a intereses de los poderes fácticos de Argentina, necesita encontrar nuevos caminos para fortalecer su presencia y adecuar sus políticas y una legislación a favor de los intereses populares. Existe un esfuerzo favorable en este sentido; pero la realidad exige un ritmo más ágil y dinámico. De lo contrario estas mayorías votantes al ver defraudadas sus aspiraciones, van debilitando su confianza en las herramientas de participación democrática. Leyes demoradas en el Congreso, como la del “aporte voluntario” del reducidísimo grupo de los más ricos para cubrir necesidades específicas de la pandemia, no ha podido todavía aprobarse, por dilaciones de una oposición parlamentaria sustentadora de las minorías privilegiadas que no aceptan haber perdido las elecciones. Bueno sería que se contagiaran de los “83 millonarios por la Humanidad”, que en el mundo decidieron desprenderse de un poco de sus riquezas para aportar a combatir la pandemia.

Vendas en los rostros

Otro rostro epidémico vienen mostrando las instancias judiciales. Aquí el virus acarrea una larga infección, al tratarse – en otras cosas - de un poder institucional que no pasa por el filtro del voto popular, lo que a su vez eterniza esa aura de inamovilidad medieval hasta en sus hábitos sociales. La Suprema Corte de Justicia demoró una resolución sobre tres jueces que, por designación del ex presidente Macri, ocuparon funciones sin respetar los mecanismos previstos. Y las demoras en la indefinición – como en otros casos – se asemejó a la negación de justicia, que es lo experimentado por los pobres cuando les toca concurrir a los tribunales. Igual sucede con las dilaciones para tratar proyectos de cambios en lo judicial, que si bien no llegan a reformas sustantivas, serían un primer paso en ese camino. Aquí también la lentitud legislativa restringe credibilidad a las instituciones democráticas. El gobierno nacional no ha mostrado celeridad tampoco en reclamar que el Congreso designe al Procurador General propuesto – Dr. Daniel Rafecas - , que contribuiría a transparentar el funcionamiento judicial.

Si bien es valorable el esfuerzo por el diálogo y el respeto a las formas democráticas demostrado por el gobierno nacional, escasamente correspondido por la principal fuerza opositora y explícitamente negado por

el ex presidente Macri, en el balance del primer año del gobierno del Frente de Todos también deben incluirse las oportunidades perdidas, que se convirtieron en desaciertos al no lograr implementarse. Las mejores políticas son las que se ejecutan, no las que se declaman. Por eso a veces es preferible acotar la medida que se quiere, antes que proponer lo mejor – como podría haber sido la expropiación - sin tener asegurado el camino para hacerla viable. Así sucedió con el vaciamiento del multirubro empresarial Vicentín, ahora envuelto en una maraña judicial, que tendrá a los productores del campo, y al Estado Nacional como principales perjudicados, al no poder recuperar, en el caso del Banco Nación, la devolución de préstamos multimillonarios que dio pocos días antes de la fuga del ex presidente Macri. La justicia en Reconquista (Santa Fe) corrió la venda a favor de los poderosos, como hizo la de Entre Ríos al obedecer el mandato de los terratenientes Etchevehere, que despojaron de sus bienes hasta a su propia hermana Dolores. Los escándalos y abusos intra e inter familiares han salido a la luz por obra de sus propios miembros. Lo mismo ha sucedido con la publicación del libro *Hermano*, con las revelaciones de Mariano Macri sobre los negociados y hechos de corrupción de su hermano el ex presidente Mauricio. Aunque buena parte de las historias de corrupciones, evasiones impositivas, narcolavados, fugas de capitales, explotaciones laborales, violencias de género, etc., ya se conocían, ahora tomó difusión masiva. En el caso de los terratenientes Etchevehere, en Entre Ríos, la decisión de Dolores, la hermana menor, de destinar el 40 % de su multimillonaria herencia al proyecto agroecológico de un grupo de familias campesinas, despertó la ira de los grandes hacendados que se movilizaron haciendo ostentación de su poder sobre las instituciones políticas y judiciales de su provincia. Con el desalojo judicial del Proyecto Agroecológico Artigas y Dolores, quedó al desnudo la prepotencia de los enriquecidos y las distintas formas delictuales – ya denunciadas - para hacerse de fortunas cuyo origen genuino no pueden explicar, salvo las derivadas de la superexplotación de la mano de obra, los “montaraces” del campo, como definió a sus trabajadores rurales, el patrón mayor, que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y Ministro de Agricultura y Ganadería del presidente Macri.

Como en el caso de las tierras ocupadas en Guernica (provincia de Bs. As.) se agitó el fantasma del ataque a la propiedad privada. Los grandes medios afines a los poderes económicos hegemónicos intentaron mostrar en sus titulares a los demonios sueltos que sin embargo no le

quitaron ni un metro de tierra a nadie. Pero la propagación del falso discurso penetra en esos sectores sociales proclives a dejarse encandilar por la pantalla boba. Y se suman al coro de los banderazos, que han servido para extender el contagio del virus, con numerosas víctimas aquí y en todos los países del mundo. Muchos de estos, - dicho de paso -, se han visto obligados a adoptar nuevamente severas restricciones de la libertad para cuidar la salud de la población. Y aunque la prensa liberal hegemónica diga que eso sucede en la China comunista, en realidad ha sido peor en los gobiernos neoliberales de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y otros. Algo parecido ante el espanto de la vacuna rusa, que podría inocular algún desactualizado virus ideológico!

No hacía falta que el gobierno se empeñara en aclaraciones a favor de la propiedad privada, porque además de la falacia de los opositores, existe una realidad de injusta distribución de las tierras, cuya propiedad ha sido adjudicada por leyes hechas por el sistema capitalista, después de haberlas arrebatado a sus ocupantes originarios, mediante repetidas violencias y represiones genocidas.

El Papa Francisco, en su última encíclica *Fratelli Tutti*, ha recordado la antigua doctrina cristiana de la destinación universal de los bienes y el derecho primario del usufructo que tienen todas las personas en una sociedad fraterna que construye la amistad social. “Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso.” (*Fratelli Tutti*, 119). No se necesita de ningún paraguas mediático para despejar temores, más en una “nación católica”. Posiblemente sí haría falta que quienes la representan institucionalmente recordaran esta tradicional doctrina católica, a tantos fieles que aún en pandemia desean concurrir a las iglesias para recibir el mensaje de Jesús en su evangelio.

Nadie desconoce que estas palabras del Papa Francisco, como otras que viene repitiendo desde hace tiempo, resultan incómodas, cuestionan intereses y perjudican relaciones con benefactores, que tranquilizan su conciencia con migajas para los pobres. Tampoco los gobiernos deben asustarse con los mensajes y acciones disociadoras de los mezquinos que no quieren compartir lo que tienen. “Cuando le damos a los pobres las cosas indispensables no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo”, ha dicho Francisco repitiendo a San Gregorio Magno. Y ha recordado que es necesario “superar esa idea de las políti-

cas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos” (Fratelli Tutti, 169). Aquí está resumido el deber de los cristianos que quieren ser fieles al evangelio de Jesús y a los pobres que son sus destinatarios privilegiados. Para ser claros, políticas sociales en el marco de un proyecto popular. No asistencialismo, sino justicia social. Y sin temor a meterse en el barro.

Estas reflexiones políticas en pandemia aluden a un panorama parcial de realidades que reclaman fortalecer las herramientas políticas capaces de responder con justicia social y soberanía popular. El Frente de Todos, alianza que tiene al peronismo con sus matices como eje, pero que incluye a otros actores sociales – sindicales y empresarios – debe crecer en representación política en las elecciones parlamentarias del año próximo, para acelerar el paso de las realizaciones. En el presidente Alberto Fernández y los gobernadores provinciales, del amplio territorio federal, reside la principal responsabilidad de garantizar el funcionamiento de las instancias políticas, que sustentadas en las organizaciones populares, brinden las respuestas más adecuadas a las múltiples necesidades de hoy, avanzando en el ejercicio de derechos conculcados o aún nos plasmados en políticas públicas. El Acuerdo Social propuesto, ampliando la participación sectorial, puede ser el instrumento que acreciente las bases de los consensos. Pero para que no quede reducido al tironeo de intereses o en expresión de anhelos, es fundamental el rol del Estado, fortalecido, ágil, dinámico, presente. No sólo para articular y garantizar la ejecución, sino para equilibrar la balanza, generalmente contrapesada por los que ya vienen favorecidos en el reparto de una torta, que los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los pobres en general, agrandan con el esfuerzo cotidiano de su trabajo, siempre mal compensado si prevalecen sin control las corporaciones empresariales. Bien se ha sintetizado: “si no regula el Estado, regula el mercado”. Aún en pandemia, existe la posibilidad de modificar los rostros de las epidemias que padece el pueblo argentino. La responsabilidad es política, pero con la activa participación del conjunto social.

Luis Miguel Baronetto
Noviembre/2020